

# Militares haciendo buena letra

**E**n mayo de 1991 se firmó en Estados Unidos un convenio MARCO antidrogas, en el cual Perú logró que se reconociera al campesino cocalero como interlocutor válido, por no ser éste narcotraficante sino víctima de la crisis económica peruana. Fue, para Perú, su principal victoria en este convenio.

Poco después, en julio, se firmó otro acuerdo. Esta vez de carácter militar. Estados Unidos venía prestando asesoramiento y entrenamiento a oficiales del ejército y policía peruanos. La firma del nuevo acuerdo militar significa que, luego de 20 años de interrupción, desde el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, Estados Unidos prestaría armamento especializado a Perú para combatir a las bandas de narcotraficantes que operan en la selva peruana e impedir el ingreso de las avionetas "narcos" colombianas. Aparentemente estas armas no serán utilizadas para la lucha contra la subversión.

En regiones como Huallaga, Tarapoto, Quillamba y otras, productoras de hojas de coca, los campesinos cocaleros se mantienen expectantes ante la inminente erradicación-sustitución de sus cultivos. Los cocaleros no creen en la sustitución rentable. Todos los proyectos en ese sentido han sido un fracaso. A pesar de esta experiencia, en Perú no se conoce, hasta ahora, un solo proyecto serio de sustitución.

A la violencia producto de la coca, se suma la participación activa de Sendero Luminoso así como del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que vienen manipulando a varios miles de campesinos cocaleros, condenando al convenio por considerarlo el principio de una intervención armada.

## DENUNCIAS

Hasta el momento, ni un solo dólar ha llegado a Perú, producto del convenio, debido a un bloqueo en el Congreso estadounidense, ya que Perú no cumple con las condiciones establecidas en la Ley Internacional de Control de Narcóticos, decretada en 1990 en Estados Unidos, para Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, referentes a éxitos en la lucha contra el narcotráfico, respeto a los derechos humanos y la investigación de las denuncias de los mismos.



ciones y respeto absoluto a los derechos humanos.

## ESCOPETAS OBSOLETAS

La crisis económica ha llegado al nivel de tener que limitar las acciones antisubversivas, como la Operación Ene en la selva central, donde el ejército tuvo que retirarse casi totalmente, sin haber concluido el operativo, por falta de presupuesto para mantenimiento de helicópteros y abastecimiento de tropa. El resultado: los nativos ashaninkas se quedaron solos con sus arcos y flechas y unas cuantas escopetas obsoletas, frente a Sendero Luminoso. Ahora, sin la fuerza del ejército, los nativos se sumarán a Sendero Luminoso o los subversivos comenzarán su venganza.

Convenio de por medio, diversos sectores peruanos cuestionan sobre si el verdadero objetivo de Estados Unidos es acabar con el cultivo de la coca en Perú, entendiendo que esto sólo es posible con un buen programa de desarrollo alternativo. Todo indica que el poderoso país del norte no comprende que sin su ayuda económica —y significativa— Perú no logrará el desarrollo alternativo que requieren las zonas cocaleras.

**Fujimori lucha contra la violencia producto de la coca**

También se ha considerado la alarmante corrupción policial. En Perú no sólo desaparecen los bienes incautados al narcotráfico —automóviles, joyas, dinero— sino que también se duda que la cantidad de cocaína entregada a la Dirección Policial de Drogas, sea el total de la incautada en los operativos.

El argumento de más peso para el bloqueo es la violación a los derechos humanos por fuerzas policiales y militares. Un total de 173 desaparecidos en el primer año de gobierno del presidente Alberto Fujimori.

Ante esta situación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas impartió una orden terminante: no más desapare-

“La cantidad asignada por Estados Unidos a Perú en el convenio MARCO para el desarrollo alternativo, es de un millón 900 mil dólares, suma insignificante para las necesidades”, dijo el presidente de la Comisión Andina de Juristas, Diego García Sayán.

Luego agregó categórico: “Si Estados Unidos prioriza la ayuda militar, quiere decir que el convenio es más un *show-off* del gobierno norteamericano para sus electores, de modo que ellos vean su ‘guerra contra las drogas’ expresada en equipo militar y en consecuencia no pensar en las razones de fondo, que tendrían que ser atacadas con respuestas económicas”.

Verónica Sáenz P.